

# Realidad Nacional

La pregunta circula entre las comunidades, las organizaciones sociales, la cooperación internacional y en el propio gobierno: ¿qué hará el Presidente Zelaya con la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP)?

La respuesta exacta todavía no existe, pero lo que está fuera de duda es que si habrá cambios, y que la dirección de los mismos apunta a generación de empleo masivo y rápido, así como una mayor inversión en los dos grandes rubros sociales del Estado: educación y salud.

Zelaya es el tercer gobernante involucrado en la ERP; primero fue el liberal Carlos Flores Facussé, en cuya gestión nació la propuesta, derivada del impacto del huracán Mitch, las exigencias de los organismos financieros internacionales y la Iniciativa de Países Pobres Severamente Endeudados (HIPC). Luego siguió el nacionalista Maduro, al que no le atraía mucho el tema, sin embargo, tuvo que asumirlo como condicionalidad para que el país alcanzará el Punto de Culminación de la deuda externa.

Maduro le entró a regañadientes al asunto y fue después de pasar la mitad de su mandato que aceleró los trámites.

Para Maduro, la ERP era, sobre todo, una condición y un producto de exportación de imagen. Su énfasis fue llenar los trámites jurídicos y administrativos que el proceso exigía. Más que reducir el porcentaje de pobres, a Maduro le interesó la condonación parcial de la deuda.

Zelaya hereda una ley, estructuras sociales montadas y el alivio efectivo de la deuda, pero en la práctica, en la ejecución misma de la ERP, todo lo tiene por hacer. En principio, lo que despierta la atención es cierta anarquía en la elección de los altos funcionarios que tendrán a su cargo la puesta en marcha de la ERP, sobre lo cual lo que se nos ocurre preguntar es cómo combinarán sus funciones, y espacios de poder o si lo que se nos avecina es un conflicto de competencias o no.



## ¿Qué hará el Presidente Zelaya con la ERP?

Por el momento, el organigrama público anda todo confuso ya que el papel del Ministerio de la Presidencia, tan presente en el gobierno anterior, tampoco está claro. A Yani Rosenthal el tema no se muestra de su preferencia, sin embargo, adscrito a su ministerio está la Cuenta del Milenio y la UNAT.

La otra pregunta es qué pasará con las prioridades definidas para la ejecución de programas y proyectos de la ERP. ¿Se respetará el trabajo hecho o habrá nuevos encargos?

De igual manera habrá que precisar la importancia y el manejo que el gobierno liberal dará al Fondo para la Reducción de la Pobreza, pendiente aún de que concluyan los acuerdos de condonación derivados de la Iniciativa HIPC.

Esos recursos, de acuerdo con la ley, deberán ser marcados en el Presupuesto General de Egresos e Ingresos según su fuente de financiamiento, área programática, ubicación geográfica e instituciones involucradas en la ERP. Como se sabe, el presupuesto para el 2006 está pendiente de aprobación.

En ese apartado sobresale la otra inquietud: ¿se respetará o no las decisiones del Consejo Consultivo de la ERP? En esa instancia, legalmen-

te, se articulan el Grupo Técnico Interinstitucional (GTI), la Unidad de Apoyo Técnico y el propio Congreso Nacional, con tres diputados designados para acompañar al Gabinete Social. El gobierno tiene que mover una amplia y costosa maquinaria burocrática para impulsar la ERP. De hecho tienen responsabilidades 17 ministerios, incluyendo el FHIS y el INAM.

En la práctica, casi todo el gabinete nuevo desconoce lo que es la ERP; sabe generalidades, pero su tarea inicial es aprender, y los únicos donde hay continuidad es en los doce representantes de la sociedad civil que integran el Consejo Consultivo, y en la UNAT, cuyos técnicos tocarán la música que les ordenen las nuevas autoridades.

En ese panorama, el FOSDEH manifiesta su posición a favor de que cualquier cambio en la ERP sea para profundizarla como instrumento social, no para debilitarla, ni para profundizar los errores en su manejo de la pasada administración.

Una buena prueba de voluntad será respetar los proyectos ya priorizados por la sociedad civil y de los cuales hay una asignación en las Disposiciones Generales del anteproyecto de Presupuesto.

Col. Alameda, Ave. Tiburcio Carías Andino, Casa No. 1011, Apdo. Postal 12468, Tegucigalpa, Honduras. Tel/fax: (504) 239-2110/10  
Correo electrónico: fosdeh@cablecolor.hn Pagina web: www.fosdeh.net

Diseño gráfico: PROYECTO2 (laura maldonado)



**FOSDEH**  
FORO SOCIAL DE DEUDA EXTERNA  
Y DESARROLLO DE HONDURAS

Cada una de esas iniciativas tiene tras de sí un trabajo serio y responsable de elaboración, además de responder a la expectativa de miles de hombres y mujeres que han participado y elaborado las Estrategias Regionales de Combate a la Pobreza en cinco regiones del país y en las consultas organizadas por el gobierno para el desarrollo de múltiples diagnósticos y consultas.

Si ahora el gobierno llega con la política de borrón y cuenta nueva, lo que sobrevendrá es una honda frustración en las comunidades y en permanentes protestas sociales frente a Casa Presidencial.

Asimismo, el FOSDEH reclama de las autoridades liberales atención a las estrategias regionales de reducción a la pobreza ya elaboradas, y que requieren respaldo político de alto nivel para llevarse a cabo. En ellas están contemplados los resultados inmediatos que el Presidente Zelaya demanda porque la inversión no se hará en estudios, sino en obras concretas.

Las estrategias regionales parten de una base territorial, articuladas a los planes municipales de desarrollo y siguiendo el principio de participación ciudadana que ahora se reclama.

Recuperando lo que la propia ley establece, resulta de especial importancia que las autoridades mantengan:

- *La armonización de prácticas de gestión descentralizada a nivel municipal, uso de indicadores, transparencias y rendición de cuentas con el resto de programas y proyectos de la ERP.*
- *La organización de la demanda y el establecimiento de prioridades a nivel territorial*
- *El registro del conjunto de planes, programas y proyectos de acción; incluyendo los propios, a nivel territorial, y;*
- *Su contribución al monitoreo descentralizado de la ERP.*

Para todo ello cabe otro señalamiento, el respeto a la ERP no se limita a un asunto entre hondureños y hondureños; también involucra a la cooperación internacional, motivadora de este proceso en el cual están embarcadas tantas esperanzas.

Ahora que el proceso de condonación ha avanzado es cuando la cooperación, con los OFI en primera fila, deben mantener su presión para que los pobres no salgan burlados nuevamente. En este tema no vale lavarse las manos.

# La sociedad civil cumplió, ahora le toca al Gobierno

Jorge Irías es uno de los principales especialistas del FOSDEH en el tema de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP). Sus aportes técnicos y sociales han sido constantes a lo largo de un proceso complejo y, de alguna manera, incierto. No siempre se sabe cuál será el rumbo de la ERP puesto que la afecta cada cambio de gobierno, la visión que tengan los funcionarios y técnicos gubernamentales, las variaciones de políticas en los organismos internacionales de financiamiento y hasta la calidad del compromiso que tengan las organizaciones sociales representadas en el Consejo Consultivo de la ERP. De todo ese vaivén ha sido testigo Jorge Irías, quien habla para este suplemento.

## “La priorización se completó”

Lo primero que plantea es que para el 2006 el compromiso gubernamental es ejecutar los proyectos que ya fueron priorizados en maratónicas sesiones en el 2005.

“Los procesos de priorización fueron completados, pero mi duda está en el financiamiento real disponible para los mismos. El FOSDEH siempre ha insistido en el tema de los recursos, los reales, no los que se anuncian, y a veces por advertir que no hay un manejo transparente de las cifras, el FOSDEH ha caído mal, sin embargo, el tiempo nos da la razón”.

El FOSDEH forma parte del Consejo Consultivo como suplente en la representación del

sector de las ONG, cuyo titular es José León Aguilar (FOPRIDEH), y en ese organismos “hemos insistido en el tema del financiamiento para los proyectos porque no se puede despertar expectativas en las comunidades y después fallarles”.

Ahora, subrayó, hay otras voces que se suman a esa inquietud, incluyendo la representación del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP).

Jorge Irías destaca, como saldo del trabajo realizado en el 2006, que “por primera vez la sociedad civil tiene proyectos claramente identificados en la ERP, es decir, iniciativas surgidas desde los sectores de base de nuestra sociedad, y eso, creo, es importante”.

La reacción gubernamental ante ese esfuerzo ha sido diversa; desde funcionarios que reconocen la validez de esas demandas hasta otros que reclaman que todos los recursos mejor se canalicen a favor de las municipalidades.

Los proyectos en total suman unos 614 millones de lempiras, pero el FOSDEH duda que esa cifra se acepte finalmente por las autoridades. Sus dudas son razonables; de hecho, fuentes gubernamentales hablan de una cifra sustancialmente menor.

Jorge sostiene que ha existido mucha manipulación y desinformación al respecto. “Si recordamos, el ex Presidente Maduro hablaba de unos 4.000 millones de lempiras, y esa suma no es cierta”.



## No fallar

Al margen de la cantidad real disponible, en la priorización de los proyectos “hay mucha esperanza de las comunidades y de la gente involucrada en la formulación de planes de desarrollo municipal y estrategias regionales de combate a la pobreza”.

Recordó que en septiembre del año pasado hubo días en los cuales trabajamos hasta 24 horas seguidas para cumplir los compromisos, “y eso no debe ser olvidado en la actualidad”.

La prisa de septiembre tenía por objetivo que las sumas necesarias para ejecutar los proyectos fueran incorporadas al Presupuesto General de la República para el 2006, y se logró, sin embargo, con el cambio de gobierno la aprobación final está pendiente. La pregunta es: ¿respetará o no el gobierno ese compromiso social?

Lo que advierte el FOSDEH es que con la priorización, la sociedad civil sintió haber sido tomada en cuenta de manera efectiva, no como simple comparsa, y al respecto no debe haber marcha atrás.



Querer olvidar que los proyectos priorizados cuentan con el respaldo de la ciudadanía o que los mismos fueron aprobados por el Consejo Consultivo de la ERP, a nuestro juicio sería muy perjudicial para el proceso.

Una de las promesas electorales iniciales de Mel Zelaya fue darle continuidad a la ERP, “y lo que esperamos es que no desconozca lo hecho, dijo Jorge Irías.

En tono positivo agregó que “a mi me parece que es posible que la ERP tenga oportunidades con un gobierno liberal, el gobierno de Maduro terminó aceptando la ERP en el tercer año de su mandato porque no le quedaba otra; por pura presión internacional. Ahora el asunto es que la sociedad no se quede a la expectativa sino que pueda reclamar los compromisos pactados”.

Para el FOSDEH, vigilar el proceso y aportar a su ejecución, es una preocupación central a la que no tiene ninguna intención de renunciar o claudicar.



El G-16, que agrupa a los países y organismos bilaterales y multilaterales de cooperación, tiene un gran desafío por delante: no abandonar la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP).

Un primer paso fue la reunión que sostuvieron con el entonces presidente electo, José Manuel Zelaya Rosales, en la que intercambiaron varios puntos de vista.

Hoy Zelaya Rosales ya es Presidente de la República y se encuentra abocado a la hora de las verdades.

El gobernante se mostró interesado en el impacto de la estrategia y en desarrollar indicadores que los prueben. Eso está bien, pero el asunto es que han sido las autoridades de decisión política y las instituciones ejecutoras las que han fallado con la estrategia, no la estrategia misma.

El FOSDEH ha planteado en repetidas ocasiones que una estrategia desligada del resto de políticas y programas sociales del Estado, y que no incida en el modelo económico vigente está condenada a no tener nunca la capacidad para afrontar la pobreza creciente de la población.

Por ejemplo, que uno de los objetivos principales del manejo macroeconómico del país es la reducción del déficit fiscal, pero esto le resta importancia a la ERP y a la política fiscal que quiere apoyar el combate a la pobreza.

En algo que varias organizaciones de la sociedad civil coinciden con el Presidente Zelaya es que los fondos que se invierten en la estrategia debe dar resultados prácticos, es decir, debe llegar a los pobres, algo que no está ocurriendo debidamente.

Al menos 80% de los recursos que el Estado asegura invertir en la ERP se quedan en manos de la burocracia o de intermediarios. Apenas un pequeño porcentaje llega efectivamente a quienes deben ser sus únicos destinatarios.

“Así que toda estrategia que no tenga masividad en la ejecución y no se pueda evaluar el impacto, prácticamente no tiene los resultados que se esperan”, dijo Zelaya ante el G-16, un organismo que hasta siendo dirigido por la representación diplomática de Alemania, encabezada por el embajador Paul Resch.

Hasta ahora, el G-16 mantiene como principal contraparte al gobierno de Honduras, trabajando con tres entidades principales: el Ministerio de la Presidencia (a través de la Unidad de Apoyo Técnico - UNAT), la Secretaría Técnica y de Cooperación Internacional (SETCO) y la Secretaría de Finanzas (SEFIN).

Si la ERP no se ejecuta y no se alcanzan sus objetivos, los integrantes del G-16 serán co-responsables de lo que pase, al menos éticamente hablando.

### Sólo para recordar

*A continuación publicamos nuevamente los montos de los recursos de condonación que cada departamento recibiría para la ejecución de proyectos para la reducción de la pobreza*

Cod.	Departamento	Monto Asignado
01	Atlántida	51,151,995.00
02	Colón	71,396,940.00
03	Comayagua	152,613,134.00
04	Copán	204,564,696.00
05	Cortes	97,496,758.00
06	Choluteca	144,995,434.80
07	El Paraíso	158,278,746.00
08	Francisco Morazán	241,402,933.00
09	Gracias a Dios	65,801,694.00
10	Intibuca	158,915,705.00
11	Islas de la Bahía	33,545,880.00
12	La Paz	168,439,490.00
13	Lempira	260,905,324.00
14	Ocotepeque	124,669,662.90
15	Olancho	185,996,614.00
16	Santa Bárbara	224,412,818.00
17	Valle	77,928,263.00
18	Yoro	85,183,185.00
	<b>TOTAL:</b>	<b>2,507,699,272.70</b>



## El rostro descarado de la desigualdad

una de las tasas de desnutrición más altas de América Latina en menores de 14 años.

Bajo esas circunstancias, nadie duda que el tema de la desigualdad es profundo y complejo, al grado que abunda quienes no lo ven como un problema, sino como una manifestación “natural” de la sociedad.

Recientemente el Banco Mundial difundió un estudio sobre la situación de los países de América Latina respecto a la desigualdad de sus habitantes, tanto dentro como entre países. El informe del banco llegó a una conclusión que todos sabemos: el continente enfrenta enormes desigualdades con escandalosas situaciones de pobreza y marginación. Un ejemplo alarmante al respecto lo encontramos en Honduras, donde 75% de la población vive con menos de 2 dólares al día.

Para hacerle frente no basta aumentar el ingreso per cápita o la inversión pública social, sino que va mucho más allá de eso. Según fuentes oficiales, el Gasto Público Social pasó de 77 dólares por persona en 1990 a 136 dólares en el 2004, y en ese período medio millón de personas se sumó a la pobreza. Esa es una de las razones que explica el impresionante éxodo de los migrantes hondureños.



Con la irrupción de la Estrategia de Reducción de la Pobreza (ERP), la pobreza entró a la mesa de los pobres, pero sin que oficialmente se convidara a un invitado clave: la desigualdad.

Si América Latina es una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo; Honduras es de los países más desiguales en América Latina.

Los síntomas de desigualdad van más allá del ingreso per cápita y son evidentes en la calidad y el acceso a los servicios, como salud, educación, agua potable, saneamiento, electricidad, transporte, justicia y democracia, persisten, además, enormes disparidades en términos de participación, bienes y oportunidades.

La disparidad es tal que, por ejemplo, los niños más pobres tienen 4 años promedio de educación, mientras que los más ricos tienen 10 años y más. De acuerdo con los especialistas en el tema, se requieren doce años o más de educación promedio para salir del círculo de la pobreza en nuestro país.

En ese sentido, los organismos internacionales de financiamiento, esos grandes promotores de la desigualdad, reconocen que aunque la mayoría de los indicadores macroeconómicos puedan considerarse estables, las perspectivas de cumplir con las metas de la ERP y del Milenio son lejanas e inciertas.

En particular, destacan, se necesitarán importantes esfuerzos para reducir la tasa de mortalidad infantil y salvaguardar la sostenibilidad ambiental antes de 2015. La tarea es inmensa porque el problema crece en lugar de disminuir: de acuerdo a las mediciones por talla y por edad realizadas entre escolares de primer, de 6 a 9 años, el porcentaje de desnutrición aumentó de 34.9% en 1991 a 36.2% en 2001, y sigue creciendo.

Las cifras de la desigualdad se vuelven más dramáticas en las zonas rurales que en las urbanas. El 42.1% de los niños campesinos son desnutridos, frente a 24.6% en las zonas urbanas.

Con ese lastre social es obvio que se frene el ritmo de la reducción de la pobreza, con números absolutos cada vez mayores. Entre 66% y 80% de la población es pobre, dependiendo de las fuentes de información que se consulten.

Al margen de las cifras, la desigualdad se acentúa en los grupos sociales más vulnerables: desde los indígenas hasta las madres solteras. En grupos sociales como los indígenas de la Montaña de la Flor o los tawahkas no existe un solo nativo que se haya graduado de educación superior.

Nacer lenca es empezar mucho más atrás en la búsqueda del desarrollo humano. De hecho, la población indígena y garífuna del país, tiene



## La desigualdad de Honduras en el mundo

La tabla siguiente muestra dos indicadores de desigualdad: el Coeficiente de Gini y la comparación de deciles extremos en el mundo.

	País	10% más rico respecto 10% más pobre	Coeficiente de Gini
1	Namibia	128,8	70,7
2	Lesotho	105,0	63,2
3	Botswana	77,6	63,0
4	Sierra Leona	87,2	62,9
5	República Centroafricana	69,2	61,3
6	Swazilandia	49,7	60,9
7	Guatemala	55,1	59,9
8	Brasil	68,0	59,3
9	Paraguay	73,4	57,8
10	Sudáfrica	33,1	57,8
11	Colombia	57,8	57,6
12	Chile	40,6	57,1
13	Zimbabwe	22,0	56,8
14	Panamá	62,3	56,4
<b>15</b>	<b>Honduras</b>	<b>49,1</b>	<b>55,0</b>
16	México	45,0	54,6
17	El Salvador	47,4	53,2
18	Zambia	41,8	52,6
19	Argentina	39,1	52,2
20	Papua Nueva Guinea	23,8	50,9
21	Nigeria	24,9	50,6
103	Rumania	8,1	30,3
104	Mongolia	17,8	30,3
105	Austria	7,6	30,0
106	Etiopía	6,6	30,0
107	Croacia	7,3	29,0
108	Ucrania	6,4	29,0
109	Rwanda	5,8	28,9
110	Eslovenia	5,9	28,4
111	Alemania	6,9	28,3
112	Macedonia, ERY	6,8	28,2
113	Albania	5,9	28,2
114	Finlandia	5,6	26,9
115	Hungría	5,5	26,9
116	Uzbekistán	6,1	26,8
117	Bosnia y Herzegovina	5,4	26,2
118	Noruega	6,1	25,8
119	Eslovaquia	6,7	25,8
120	República Checa	5,2	25,4
121	Suecia	6,2	25,0
122	Bélgica	7,8	25,0
123	Japón	4,5	24,9
124	Dinamarca	8,1	24,7

## De lo social a lo político

Como es lógico pensar, a la desigualdad social corresponde una desigualdad política, lo que explica que centenares de cooperativas que tienen miles de socios y manejan millones de lempiras tengan menos influencia que un solo empresario de la maquila o de la industria.

El problema es que las elites dan forma a las instituciones y las políticas públicas conforme sus intereses, no los intereses de la mayoría. En materia fiscal, desde que Callejas inició el modelo de ajuste estructural la composición del sistema cambió la importancia de los impuestos y volvió centrales los que golpean al mayor número de personas: el Impuesto sobre Ventas



y el impuesto a los combustibles. En contraste, bajó los impuestos al comercio exterior y a las inversiones extranjeras. Mientras los negocios de comida rápida fueron favorecidos, los negocios nacionales fueron perjudicados.

La desigualdad va así de la mano con la inequidad, lo que explica las políticas regresivas que se ponen en práctica, tanto que los pobres pagan más impuestos que los ricos. Mientras el 10% de la población más pobre tiene una presión tributaria de 41.1% con respecto a su ingreso, el 10% más rico tienen una presión tributaria del 18.9%, o sea un margen de diferencia del 22%.

Eso hace afirmar a ciertos sociólogos que el factor clave para reducir la desigualdad demanda emprender una reforma institucional, promoviendo que los pobres ejerzan mayor influencia en las instituciones políticas y sociales, subrayando que las instituciones públicas deben ser totalmente abiertas, transparentes, democráti-

cas, participativas y fuertes. Lograrlo no es fácil por la resistencia que los grupos poderosos ponen a cada reforma que consideran lesiva a sus negocios, como viene ocurriendo con el anteproyecto de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

El consenso existente es que a medida que se procede con la reforma institucional, que permitiría a los pobres obtener poder en el proceso de toma de decisiones, es más probable que se adopten políticas para reducir las desigualdades.

Eso convierte el poder en un escenario de lucha donde los más fuertes suelen imponer sus decisiones a los más débiles, aunque éstos sean mayoría, y así se perpetúan las desigualdades.

Por si fuera poco, las tragedias naturales, como el paso del huracán Mitch, o las tragedias económicas, como la caída en los precios del café, aumentan el impacto de las desigualdades y se necesitan décadas para reducir sus efectos.





## ¿Más de lo mismo?

En ese panorama cabe una pregunta esencial: ¿es “rentable” la desigualdad?

Desde cualquier ángulo, las grandes desigualdades perjudican a la economía, reducen el mercado interno de consumidores, impiden a las empresas que puedan producir en escalas mayores y dificulta la formación de ahorro nacional, pero, la desigualdad es también un gran y lucrativo negocio para quienes se benefician de ella. Manejar un auto de dos millones de lempiras en un país tan pobre como el nuestro podrá ser una ofensa a la ética y la moral, pero eso no impide que sea mayor el número de carros de ese monto que circulen por las calles.

En ese sentido, para combatir la pobreza hay que combatir la desigualdad. Ese es el desafío central. Fortalecer el “capital social” de los pobres es importante, pero no basta; el punto es volver esta sociedad más justa. Sólo durante la administración de Ricardo Maduro su gobierno aseguró haber gastado 44,189 millones de lempiras en el marco de la ERP y la pobreza apenas se redujo, oficialmente, en 1.8%, cuando – según la meta- debió haber sido de 8%.

Con el trabajo del FOSDEH y de otras organizaciones, la ciudadanía está cada vez más consciente de que hay “una deuda social enorme”, y que en una democracia se espera que se encare y resuelva, y lo está expresando en protestas sociales y eligiendo nuevas alternativas políticas que den respuesta a este cuadro tan profundo de pobreza y diferencias sociales, sin embargo, el camino es largo y falta mucho por recorrer.

Pese a que en su reciente visita a Honduras, el Director Gerente del FMI, Rodrigo Rato, le dijera al gobierno que las cosas andan bien, lo cierto es que las políticas económicas impulsadas por el FMI no han reducido los altos niveles de desigualdad existentes; al contrario, los agravan.

Eso pasará una vez entre en vigor el CAFTA o TLC EEUU-Centroamérica y República Dominicana. Según cálculos gubernamentales, el tratado impulsará el crecimiento de la economía hondureña en un 2% durante los próximos dos años, pero otros miran el acuerdo como el camino acelerado a la pobreza, la privatización y, de nuevo, la desigualdad.

Si Honduras quiere tener prosperidad y justicia social en el futuro, requiere atender especialmente aspectos cruciales de la equidad entre sus zonas rurales y urbanas, entre sus regiones, entre grupos étnicos y entre hombres y mujeres en aspectos como el acceso a la educación, a la propiedad de la tierra y en la distribución del ingreso.

Como no tomar en cuenta que de cada cien mujeres embarazadas en las ciudades, 82 son atendidas en hospitales, mientras que en el campo sólo son 37, con todas las secuelas que implica.

**La desigual distribución del ingreso generado en estas economías, no hace sino profundizar las diferencias dentro de las sociedades, aunque el FMI de la espalda a esa realidad.**

Cualquiera constata que el abismo entre quienes tienen todo y los que tienen poco se ahonda. Hoy es natural que las clases más pudientes opten en general por la educación privada, separándose cada vez más en su instrucción

de los pobres. Luego, los mercados laborales se caracterizan por exigir niveles más y más altos de educación, lo que pone en evidencia que la formación primaria e incluso secundaria no son suficientes en comparación con la educación universitaria. Es decir que la brecha en este sentido continúa siendo amplia, y de mantenerse esta tendencia va a ser muy difícil lograr la convergencia.

A su vez, en la espiral de la exclusión, los niveles de educación determinarán la inserción laboral y el salario de cada quien.





## La deuda externa: pasos adelante, pasos atrás

En el 2005, tres eventos importantes definen el estatus de endeudamiento de Honduras en el año 2005 (de acuerdo con la UNAT). El primero se enmarca en las cinco rondas de negociaciones a las que Honduras asistió, logrando la condonación de US\$966.0 millones.

*Para llegar a ese punto el precio que pagó la mayoría de la población fue muy alto: más pobreza, lo que justificó una condonación de su deuda de más de US\$1,200.0 millones en términos nominales (US\$738.0 millones en términos de valor presente neto, de los cuales US\$182.0 millones son de alivio tradicional y US\$556.0 millones alivio multilateral).*

El segundo evento y el más importante para Honduras se da bajo la iniciativa de Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC por sus siglas en inglés<sup>1</sup>) cuando el país alcanzó el Punto de Culminación el 5 de abril de 2005.

De conformidad con la normativa de la iniciativa, el alivio de la deuda no se traslada al país en una sola operación, sino que se asigna determinada proporción del servicio de la deuda en un período de 8 a 15 años dependiendo del acreedor.

Una condicionalidad interesante es que los recursos liberados anualmente deben ser utilizados para financiar los programas y proyectos de la ERP y para la gestión y administración de los recursos financieros establecidos en la Ley del Fondo para la Reducción de la Pobreza (Decreto No.70-20-02 del 30 de abril del 2002).

El tercer evento fue la inclusión de Honduras a la iniciativa del G8 en donde se otorgó una condonación adicional de su deuda de alrededor de US\$1,534.0 millones, que se aplicarían a los saldos del Banco Mundial y el FMI, respectivamente. Cabe aclarar que esa decisión todavía no se vuelve operativa y está pendiente para aplicarse a mediados de este año, si se mantiene el acuerdo con el FMI.

Según los indicadores oficiales, la deuda pública externa se redujo durante el 2005 luego de que Honduras se beneficiara de varias condonaciones. Efectivamente, el saldo de la deuda pública externa se ubicó en US\$4,897.6 millones en septiembre de 2005, contra US\$5,082 millones en diciembre de 2004.

El saldo actual de deuda pública externa representa alrededor de 60% del PIB estimado para el 2005.

Favorecida por la reducción de la deuda bajo la Iniciativa HIPC, los alivios del Club de París y la condonación anunciada por el G-8, se prevé que el saldo de la deuda externa se reducirá en 60% en los próximos años, lo que mejoraría significativamente la solvencia de la economía hondureña.

Sin embargo, el alivio de la deuda parece un tanto pausada y no ir tan rápido como el nuevo endeudamiento, lo cual amenaza volver a Honduras al mismo punto de partida a un nivel mayor.

Para recordar conceptos, la deuda externa es la suma de las obligaciones que tiene un país con respecto de otros, y se compone de deuda pública (la contraída por el Estado) y deuda privada o del sector privado, que es aquella que contraen los particulares en el exterior.

Como las propias autoridades públicas lo admiten, un elemento fundamental de las elevadas cargas de deuda es que existe una relación negativa entre la deuda externa y el crecimiento económico.

A la puntualidad con que los gobernantes han tratado de estar al día con el servicio de la deuda corresponde su “impuntualidad” para atender la deuda social. Honduras hace más ricos a los banqueros y más pobres a los pobres.

En ese sentido, para el FOSDEH el verdadero parámetro que define la insostenibilidad de

la deuda no es la capacidad de pago nacional, sino la insolvencia social a que nos condena.

La deuda, por otra parte, beneficia claramente a quienes viven del Estado y de la corrupción. Ellos son quienes han estimulado su crecimiento desmesurado desde hace unas tres décadas, al grado que el saldo evolucionó de 12.4 millones de dólares en 1973 a 3,996 millones en 1995 y más de 5000 millones en la actualidad, si se suma préstamos pactados pero no desembolsados.

El alivio de esa deuda ha sido un reclamo constante del FOSDEH, y los gobiernos se han beneficiado de esa presión. En el año 2000 el saldo de la deuda disminuyó a consecuencia del efecto de readecuaciones y condonaciones dentro del marco del Club París IV, donde se obtuvo una reducción del 67% del Valor Presente Neto.

Algunos países, como EEUU, también “perdonaron” la deuda hondureña, pero ese beneficio no se tradujo en mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la sociedad.



Algunos organismos internacionales claves para Honduras, como el BID (nuestro principal prestamista) aún no concretan su ofrecimiento de alivio. En todo caso, los beneficios de la condonación de la deuda externa están vinculados directamente con el esfuerzo que el país tiene que hacer en materia de destinar recursos para financiamiento de programas de la ERP, y esa obligatoriedad debe ser fiscalizada, por lo cual insistimos el Fondo de la ERP debe de dejar de ser virtual para convertirse en un fondo real.

Por ello, se hace imprescindible mejorar la capacidad de manejo e impacto de los beneficios de la condonación y de los nuevos financiamientos.

Los recursos liberados con el alivio de la deuda deberán ser orientados a inversiones en programas y proyectos prioritarios que contribuyan a reducir los niveles de pobreza y aceleren el crecimiento sin la necesidad de recurrir a financiamientos que extralimiten la capacidad de pago.



## La situación de Honduras vista por el BCIE

**E**l Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) en su último análisis sobre el panorama económico y social de la región, hace un apartado interesante sobre Honduras. Tomando en cuenta la importancia de saber qué piensan los prestamistas sobre nuestro futuro, el FOSDEH reproduce en este suplemento la valoración textual de ese organismo.

En las elecciones presidenciales de noviembre del 2005, el candidato del Partido Liberal, Manuel Zelaya, fue elegido por un escaso margen para el período 2006-2010. La expectativa es que la política económica continúe enmarcada en la Facilidad para el Crecimiento y la Reducción de la Pobreza (PRGF, por sus siglas en inglés) que acordó el gobierno con el FMI desde 2004. Así, las prioridades continuarían siendo el fortalecimiento de las finanzas públicas, el reforzamiento del sistema financiero, la modernización de la política monetaria, la transparencia del sector público y las reformas sectoriales, sobre todo en energía, telecomunicaciones, transporte y agua.

Además, el Presidente Electo impulsaría una mayor descentralización hacia las municipalidades y participación de las comunidades en el desarrollo. En términos de resultados, el crecimiento económico tiende a moderar su dinamismo, estimándose en 4.2% en el 2005 y en 3.7% en el 2006, contra 5.0% en 2004.

La tasa de inflación, si bien permanece en un nivel alto, tiende a reducirse, proyectándose

en 8% en el 2005 y en 7.7% en el 2006. El desequilibrio en la cuenta comercial aumentaría, como resultado de un crecimiento más fuerte de las importaciones, especialmente de petróleo, con respecto a las exportaciones, estimándose en 26.5% del PIB en 2005 y en 30% del PIB en el 2006.

Gracias al influjo de remesas, el crecimiento de las exportaciones y los alivios de deuda externa, el déficit en la cuenta corriente sería de 3.1% del PIB en 2005 y de 3.2% en el 2006. En el bienio 2005-2006, la banca central acumularía reservas internacionales netas en el orden de US\$300.0 millones y mantendría una cobertura adecuada con respecto a las necesidades de importaciones, lo que se traduciría en estabilidad cambiaria durante este período.

En cuanto a las finanzas públicas, se prevé un déficit fiscal equivalente a 3.1% del PIB en 2005 y de 2.9% del PIB en 2006. En aspectos de dinero, la liquidez durante el 2005 y 2006 crecería en 18% y 15%, respectivamente, mientras que el crédito al sector privado en dichos años aumentaría 16% y 12.5%. Cuatro son los factores económicos críticos para el 2006: mantener la disciplina fiscal, mejorar la calidad del clima de negocios, lograr consensos políticos para impulsar las reformas contempladas en el acuerdo con el FMI y que darían mayor competitividad a la economía y preservar la estabilidad social en un marco de altas expectativas y escasos recursos.

### Realidad Nacional

Recuerde, un ejemplar digital de este suplemento puede adquirirlo totalmente gratis en la página web del FOSDEH [www.fosdeh.net](http://www.fosdeh.net) y si tiene sugerencias, comentarios o propuestas envíelas a: [fosdeh@cablecolor.hn](mailto:fosdeh@cablecolor.hn) o comuníquese con nosotros al: (504) 239-3404